

# ANTECEDENTES DE LA GUERRA CIVIL.

## LA SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA

---

*Pierre Broué*

*(Universidad de Grenoble)*

**N**O SOY UN HISTORIADOR DE LA ECONOMIA. SOY UN HISTORIADOR sin más. No creo que la omnipotencia de la economía, aunque sea importantísima en la historia, pero creo sobre todo en la capacidad de la humanidad a hacer su propia historia —aunque no es siempre la historia que quería hacer...

Por eso, voy a tratar, primero, de las principales contradicciones y debilidades de la economía española en los años treinta, pero sin creer que han sido suficientes para determinar la guerra civil y hasta algunas de sus formas. Tengo que recordar ante todo que todo el mundo de los años treinta —y no sólo España— vivía más o menos una situación de guerra civil de hecho, abierta o no, larga o breve, incluso países de estructura económica muy diferente de la estructura económica de España. Pero, en España misma, uno de los aspectos más importantes era la rigidez de la estructura social del país.

Y como soy no sólo un historiador sin más, sino un historiador especialista de la revolución del siglo XX, voy a tratar después de explicar los lazos entre esa infraestructura económica y la política sin más; la política de los partidos, sindicatos y otras fuerzas políticas como la Iglesia o el Ejército, o, por mejor decir, el Cuerpo de los oficiales. Disculpe, por favor: es imposible para mí abstenerme de recurrir a mis escritos pasados, no solo a mi libro con Témine, sino también a mi exposición en el coloquio de Tarragona sobre los factores estructurales de la guerra civil bajo el título: "De la República a la Guerra Civil"...

La crisis española tuvo lugar en el contexto del siglo XX caracterizado por Lenin, y no sin razón, como el siglo de la guerra y la revolución. Y se puede decir que la revolución de España en 1936 es la última revolución obrera y campesina entre las dos guerras mundiales. Se puede decir también que los años de la II República se desarrollen en el contexto muy particular de la crisis económica mundial iniciada en 1929. Y finalmente, no se puede olvidar sin embargo que en España se daba un régimen de democracia parlamentaria en el momento que esta última parecía estar agonizando en toda Europa.

Algunos autores tratan de comparar la España de los años treinta a la Rusia de los años diez y la revolución del 36 a la revolución del 17. Es posible. Los dos países son, en vísperas de la revolución, los eslabones más débiles de la cadena capitalista en Europa. Los dos países son países con un glorioso pasado, donde la descomposición de las clases del antiguo

régimen tuvo lugar sin que por ella se lleve a cabo la formación de una nueva sociedad burguesa en gestación, incluso la formación de la nación misma. Son países atrasados, se puede hasta decir semi-coloniales, esencialmente agrícolas, con una industria apenas salida del periódico de las manufacturas, con sectores poderosos de concentración y capital imperialista, pero no presentando en el mercado mundial más que los productos de su suelo y de su subsuelo, a cambio de los productos manufacturados de los demás países. Capitales extranjeros, belgas y sobre todo franceses e ingleses, son invertidos en los sectores más importantes y más lucrativos, tanto en el imperio ruso como en el reino español.

Veinte años sin embargo separan las dos revoluciones. La primera, la rusa, es una consecuencia de la primera guerra mundial, la ruptura del eslabón: ella anuncia el final de la guerra, el comienzo de una conflagración revolucionaria en Europa durante varios años. La segunda, la revolución española, ha sido demorada por la primera guerra mundial, y parece, en vísperas de la segunda Guerra mundial, no sólo la llamada final del fuego revolucionario ya extinguido en Europa, sino el campo de experiencia a la vista de la guerra misma. La revolución rusa era la transformación de la guerra imperialista mundial en una guerra civil; la revolución española era el preludeo y finalmente el ensayo general de la segunda guerra Mundial... La revolución rusa manifestó la crisis de la economía mundial bajo el peso de la guerra y de tantas destrucciones. La revolución española manifestó la crisis económica marcada por el retorno a la paz y, después de la crisis mundial, es decir la exclusión de los productos agrícolas de España y de los mercados extranjeros y el hundimiento de su mercado interior.

No puedo asegurar que no existiera ninguna solución. Nadie puede asegurarlo. Pero es para mí muy claro que una solución era muy difícil o, por mejor decir, que esa crisis no tenía ninguna solución con un carácter de normalidad. La razón fundamental es la rigidez de la estructura social, una extrema diferenciación social acentuando los menores contragolpes económicos, endureciendo un organismo cuyas posibilidades de adaptación eran ya reducidas.

La consecuencia mayor del estado atrasado de la economía era en efecto la profunda polarización de la sociedad española.

En mi libro con Témine, aproveché una evaluación de la población activa de once millones; de esos, ocho millones son “pobres” —es decir que su trabajo apenas les asegura la subsistencia—: son los obreros agrícolas, los obreros de la industria y los mineros y también los aparceros y pequeños propietarios rurales. El otro polo, son un millón de privilegiados, la oligarquía; entre los pobres y estos últimos, se intercalan menos de dos millones de “clases medias”, campesinos acomodados y pequeños burgueses de los centros más evolucionados.

El problema es muy sencillo. No hay posibilidad de una expansión económica mientras estos ocho millones de “pobres” no tengan más posibilidad que la de asegurar su subsistencia con un consumo reducido al estricto mínimo y un presupuesto consagrado esencialmente a la alimentación. ¿Cómo desarrollar una producción industrial? El desarrollo tenía necesidad de mercados nuevos. En el exterior, el mercado era cerrado por las barreras aduaneras y las grandes potencias. En el interior, la condición del desarrollo hubiera sido la creación de un mercado interior. Pero la creación de un mercado interior exigía el fin de la situación de pobreza de los ocho millones de pobres, la posibilidad de un aumento de su consumo y de su presupuesto. Todo eso suponía la solución del problema de la tierra, es decir menoscabar los intereses y los derechos de propiedad de la oligarquía. Lo que ella no podía aceptar.

Es en el campo, pues, donde se acusan más fuertemente las oposiciones sociales, donde se alimentan los odios seculares, particularmente en las regiones de latifundios. Es verdad

que en general la condición de las tierras y de los campesinos era infinitamente más variado que las cifras brutales de porcentaje de propietarios y de campesinos sin tierra. Entre el trabajador intermitente y el pequeño propietario se extendía toda una gama de granjeros, aparceros, con arrendamientos diferentes, de pequeños propietarios obligados a pagar censos de origen feudal, etc. El problema es que, admitiendo que los grandes propietarios querían cambiar su modo de explotación de tierras, tenían que menoscabar las ya mínimas soluciones de los campesinos y que todo aumento de soluciones de los campesinos era sentido como un intolerable ataque por los latifundistas. Y este puñado de grandes propietarios que dominaba la tierra de España habían sabido preservar, a lo largo de los siglos, lo esencial de sus privilegios y de su fortuna en detrimento de la masa campesina ¡No quieren perderlos en la República!

Por eso, contaban no sólo con los métodos clásicos del caciquismo, la corrupción y la influencia dentro del aparato del Estado sino también con los dos instrumentos esenciales para preservar su dominación: la Iglesia y el Ejército, una y otro de un tipo único en la Europa de los años treinta.

A la proclamación de la República, la Iglesia española cuenta 80.000 sacerdotes, monjas y religiosos, con un tremendo poderío. Una encuesta le atribuyó 11.000 propiedades, estimadas en cerca de 130 millones de pesetas, es decir, uno de los más grandes propietarios del país. Tenía también intereses en el mundo de los negocios, tanto la banca como la industria, controlando importantes empresas. Era además dueña de la enseñanza, totalmente durante la monarquía y en gran medida en la República: cinco millones de adultos habían sido instruidos y educados en sus escuelas. Pero su influencia no está a la altura de su papel en la instrucción —para no mencionar los doce millones de analfabetos, es decir la mitad de la población. En las regiones en que la desigualdad social es menos manifiesta, la Iglesia conservó una audiencia en las masas rurales; en la España de los latifundios, ella aparecía como el instrumento del orden moral y político de los ricos, el enemigo de los trabajadores y de sus organizaciones.

Es posible averiguar en el ejército la misma orientación como la misma dualidad. El Ejército, como la Iglesia, no tiene equivalente en Europa occidental. Ejército de pronunciamientos y de guerra colonial. Tiene un núcleo duro, los llamados “Africanos”. En los años treinta es, además, un ejército de guerra civil, aunque no pocos oficiales sean republicanos o hasta socialistas. La aplastante mayoría, sin embargo, defiende la “hispanidad” —la llamada “hispanidad”— y una buena parte de los cuadros y jefes son partidarios de la monarquía y no aceptan la república que transitoriamente y, en todo caso, son enemigos mortales de todo cambio profundo y evidentemente de la revolución.

Abril de 1931, la caída de la monarquía no fue una verdadera revolución y tampoco la caída de la dictadura del general Primo de Rivera. Era un esfuerzo de adaptación, de parte de la oligarquía, a las nuevas condiciones creadas especialmente por las consecuencias sociales de la crisis económica mundial. La revolución era una palabra tanto de los anarquistas como de los comunistas, unos y otros incapaces de prepararla e inspirarla. La única alternativa era la República.

La República estuvo en las manos de la coalición de los republicanos burgueses y de los socialistas del P.S.O.E. desde su nacimiento hasta las elecciones de 1933. Los republicanos burgueses no son la parte capitalista de la oligarquía, banqueros e industriales de Asturias y Vizcaya, quienes reparten con los terratenientes las sedes del Banco de España. Los republicanos burgueses representan a las capas pequeño-burguesas de profesionales, intelectuales y funcionarios. Su partido propio, el partido radical de Lerroux, que representa las aspiraciones de la pequeña burguesía hostil a la Iglesia y al Ejército va a

retroceder hasta aliarse con la derecha en 1933. Su parte disidente, con el masón Diego Martínez Barrio va a aliarse a la Izquierda republicana de Manuel Azaña. En 1931, Azaña, enemigo tanto de “la tiranía” de la derecha como de la “anarquía” (el proletario en mal de revolución, como dice Preston) creía en la necesidad para los republicanos de llevar a cabo un programa de reformas susceptibles de conquistarse la buena voluntad de un número suficiente de trabajadores para mantener a raya al movimiento revolucionario. Pero su primer gobierno, que fue también el gobierno de los socialistas, decepcionó profundamente a quienes no esperaban nada de la monarquía, pero estaban dispuestos a esperarlo todo de la República. La ley agraria atacó solamente el problema de los latifundios —no de los pequeños propietarios. En dos años, solamente 12000 campesinos, de los millones que tenían hambre de tierra, recibieron un lote, que tenía que pagar para indemnizar los propietarios. Tenemos aquí un ejemplo y un símbolo. El otro ejemplo y símbolo es la legislación social de Largo Caballero en lo que se refiere particularmente a los obreros agrícolas y a la ley de términos municipales. El hecho fue que ninguna de las medidas de reforma podían solucionar los problemas de vida o muerte de los trabajadores del campo, es decir reformar al sistema. Creo que Preston tiene razón cuando dice:

*“La creencia socialista de que la vieja España iba a transformarse en una sociedad burguesa moderna se basaba en dos nociones erróneas. La primera consistió sencillamente en considerar a los políticos republicanos del comité revolucionario y al gobierno provisional como la “burguesía”, que iba a cumplir el papel histórico de la burguesía inglesa en el siglo XVII y de la francesa en el XVIII. En realidad, los políticos republicanos pertenecían simplemente a la intelectualidad pequeño-burguesa urbana. La oligarquía económicamente poderosa no constituía como se imaginaba la izquierda, una estructura feudal, sino que había integrado ya sectores de la burguesía.*

*Esto era el segundo error de análisis. El momento en que la “burguesía” española podía haber tratado de barrer la obsoleta estructura del antiguo régimen había pasado hacía ya mucho. El impulso progresista de la burguesía había sido lo suficientemente débil como para impedir todo cambio de importancia en la estructura del poder político y económico (...) La clase que los socialistas esperaban que fuese progresista se encontraba ya ligada a la vieja oligarquía (...)”.*

Analizando el crecimiento de los odios y de la violencia Paul Preston añade:

*“Los choques constantes entre las fuerzas del orden público y el proletariado urbano y rural fueron el largo prelude a una guerra civil salvaje. Sin embargo, los orígenes del conflicto no hay que buscarlos en los intentos de los extremistas de derribar la sociedad, sino en los esfuerzos de los reformistas para mejorar las condiciones de vida cotidiana de los miembros desafortunados de la sociedad”.*

Tenemos que discutir esa opinión, porque está en el centro del debate sobre los orígenes de la guerra civil. Aquí, Paul Preston acusa las derechas, monárquicas o no, católicas en todo caso, de oponerse a cualquier reforma, por mínima que sea. No hay duda de eso acerca de los elementos llamados “catastrofistas”, los generales de la *sanjurjada* y los generales y grandes propietarios monárquicos del “pacto” con Mussolini. Su afirmación de rechazo de la reforma como un atentado a la hispanidad, es claro y sin vergüenza.

Pero el mismo es cierto acerca de los católicos de la Acción Católica Nacional de Propagandistas, convertida, primero en Acción Popular y después en Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDDA). Claro que refieren esos al espíritu social —o llamado social— del cristianismo. Pero, siguiendo las instrucciones y directivas del Vaticano y especialmente del propio Cardenal Pacelli, incluso acerca de su propaganda cotidiana en *El Debate* tienen, sobre todo, un programa de resistencia, como dicen,

resistencia contra cualquier amenaza de cambio en el orden religioso, económico o social. Partidarios de lo que llaman la “unión de las fuerzas antirrevolucionarias”, el lema bajo el que debían éstas unirse es “Religión, patria, orden, familia y propiedad”.

Supongo que todos aquí conocemos las principales medidas reformistas de los primeros meses de la República: la congelación de los arrendamientos, la prohibición del desahucio, el permiso a los arrendatarios para que se dirigiesen a los tribunales pidiendo una reducción de la renta, la ley de términos municipales, la actuación arbitral de los jurados mixtos en los conflictos laborales rurales, la jornada de 8 horas para el campo y el laboreo forzoso instrumento de lucha contra el *lock-out*. No son estos objetivos revolucionarios, sólo son un ensayo para aliviar las condiciones de miseria de los trabajadores del campo.

La respuesta de la oligarquía, de las organizaciones de propietarios y, sobre todo, de la Acción nacional, popular, de la jerarquía católica, fue una campaña de crítica y de denigración en la prensa, en mítines, etc., y una campaña de resistencia aprovechando la ausencia de mecanismos para hacer cumplir los decretos y caracterizada por el papel de sabotaje tanto de los altos funcionarios como de los Gobernadores civiles, y el compromiso permanente de la Guardia Civil y de sus cuadros con los propietarios. En las Cortes, como en el campo, los adversarios de las reformas fueron capaces de sabotear prácticamente las reformas.

Resulta que, como dice Preston, “la situación económica y la hostilidad de los patronos hacían imposible llevar a la práctica las reformas que están sobre el papel”. El mismo añade que “inconscientemente, Gil Robles había destacado la dicotomía básica”:

*“O se mantenía hambrienta a la población campesina o había que transferir la riqueza de los grandes propietarios, causando perjuicio en el proceso a muchos agricultores medianos y pequeños”.*

Y se mantenía hambrienta a la población campesina, con la canción de los socialistas adictos al mantenimiento de la coalición al poder. Preston escribe:

*“Más que nunca, para defender una república burguesa, los socialistas estaban sacrificando su credibilidad ante las masas socialistas”.*

El mismo relata que, en la provincia de Salamanca, “los dirigentes locales pensaban que, obedeciendo la disciplina de la U.G.T. y sometiendo al jurado mixto, las condiciones de los trabajadores habían empeorado”. Se acusaba a Largo Caballero de ser “el único responsable moral y material”. De modo general, la base del PSOE y de la UGT devenía cada día más impaciente por la lentitud de la reforma así como el éxito de la derecha en la obstrucción de su aplicación.

Tenemos aquí la famosa “radicalización”, primero de los militantes y de una parte creciente de las masas, detrás de los caudillos del socialismo reformista hasta esa época, y finalmente de las masas más largas sobre la influencia de la radicalización verbal de los jefes. No es casualidad que, entre los primeros izquierdistas del PSOE se encuentren los hombres del ministerio de Trabajo y no sólo Largo Caballero mismo, sino Arquistáin sub-secretario de Trabajo y Carlos de Baráibar, director General del Trabajo...

Es decir que los socialistas, con sus reformas, no provocaban menos odio que si hubieran propuesto, por ejemplo, una solución colectivista incorporando a los pequeños agricultores y confiscando los latifundios —una respuesta viable— sino que con sus intentos reformistas provocaron el odio de los hombres de orden y, en su propia base, una radicalización auténtica que les obligó a radicalizar su lenguaje y sus discursos y a dar una apariencia de justificación a las acusaciones de intentos de derribar la sociedad. En otras

palabras, Largo Caballero y Gil Robles juntos demostraban, *volens nolens, que no existía ninguna opción entre el statu quo, es decir la población campesina hambrienta y la solución revolucionaria, la confiscación y la colectivización del campo.*

Hubo una situación idéntica en la industria y las minas, con los obreros y los mineros. Es muy conocida la frase del líder reformista Trifón Gómez al presidente Azaña, frente a la amenaza de una huelga general de obreros ferroviarios, a pesar de algunas concesiones de los patronos:

*“Si en el gobierno no hubiese tres ministros socialistas, estas concesiones serían recibidas por los obreros con aplauso y gratitud; pero habiendo ministros socialistas, creen que han de entregarles el ferrocarril”.*

Pudiera, sin duda, decirse lo mismo de la entrega a los trabajadores de los tranvías, de las fábricas, de los talleres y de las minas. Después de esos años de gobierno de coalición republicano-socialista, el problema era claramente de cómo imponer una política de moderación de sus reivindicaciones a una base que estaba en primera línea de una lucha de clases cada vez más cruenta, y con reivindicaciones cada vez más radicales y sin ninguna preocupación de ayudar o ahorrar a los patronos y latifundistas.

Esa contradicción fue agravada desde 1933 por los acontecimientos de Alemania, la victoria de Hitler, la destrucción consiguiente del movimiento obrero alemán y sus conquistas, las reformas sociales resultantes de años de lucha bajo su dirección. En un cuadro semejante, la resistencia de los patronos del campo, de las minas, de la industria, el contra-ataque de ellos mismos detrás de la derecha política liderado por Gil Robles, el lenguaje autoritario, corporativista, violento y amenazador de esto último tienen como resultado que, para muchos obreros y especialmente jóvenes, el asalto de las derechas a los resultados del socialismo reformista eran el primer paso hacia el avance del fascismo.

Un reformista impenitente como el socialista derechista Julián Besteiro podía concluir que “si los socialistas no hubieran tratado de defender a la clase trabajadora con el apoyo del Estado, no hubieran provocado a la burguesía para que se volviese al fascismo”. Las masas no podían sacar semejantes lecciones antes de años de lucha encarnizada y de tremendas derrotas. Mientras que los reformistas aconsejaban la inacción por su hostilidad al radicalismo en general y a un reformismo limitado en unos momentos de crisis económica, el movimiento natural de las aspiraciones fundamentales y de las experiencias cotidianas de los trabajadores les empujaba a reivindicar la entrega de las tierras, de las fábricas, de los ferrocarriles, etc. y ponen cuidado en el lenguaje radicalizado de la fracción largocaballerista del P.S.O.E.

Se puede decir que la radicalización del discurso político de Largo Caballero constituye una doble respuesta a la campaña de las derechas contra las reformas y al entusiasmo de las masas por ella misma. Desde Julio del 33, constituye también un importante elemento de la situación política. Partiendo de la idea de que la experiencia de colaboración gubernamental demostraba la imposibilidad que los trabajadores pudieran conseguir sus aspiraciones mínimas dentro de la República, viene a la idea de que las derechas se preparen a tomar el poder, es decir a destruir la República para impedir las reformas: la utilización de la legalidad y de la constitución por los “fascistas” significaría el derecho y el deber para los socialistas de dejar a un lado la legalidad: el 14 de noviembre, Largo Caballero asegura que sólo la dictadura del proletariado podía llevar adelante el desarme económico de la burguesía. En el mismo momento hubo 620.000 parados, es decir el 12 por ciento del total de la población activa.

No es el momento de discutir la política de insurrección del P.S.O.E. en 1934. Me parece

suficiente decir que fue un fracaso completo, y por dos razones principales. Primero porque esa política trataba de frenar y, si fuera posible, aniquilar todos los movimientos espontáneos, es decir los movimientos de carácter político y socialmente revolucionarios para no impedir o estorbar la insurrección misma. Y, como en el caso de la huelga de campesinos de la F.N.T.T., hasta sabotarlos prácticamente. Segundo, porque esa política dejaba al adversario, o, mejor decir, al enemigo de clase en la guerra civil la posibilidad de elegir la fecha del comienzo y también las circunstancias del comienzo de la guerra civil propia —es decir la iniciativa sin más en la guerra.

¿Estamos lejos de las causas económicas de la guerra civil? No lo creo. Nuestro problema es traducir el complejo intercambio a través del cual, de la economía a la política, pasando por la estructura social, se organizaban la resistencia y el catastrofismo, el reformismo y la radicalización, en una palabra, a las respectivas posiciones de un Gil Robles y de un Largo Caballero en 1934.

El resultado de la insurrección fracasada no fue menos paradójico. La situación económica no conocía ninguna mejora; la crisis social se agrava y el único cambio fue el de las relaciones de las fuerzas políticas o, por mejor decir, de los elementos mismos del desarrollo hacia la guerra civil.

Antes de las elecciones de 1936, no hubo reformas. Hubo el discurso un poco renovado de los Azaña y Prieto, utilizando el doble fracaso, electoral de 1933, y la derrota de la insurrección del año siguiente. Proponían reformas moderadas y defensa de la República, lucha contra la tiranía y la anarquía, es decir contra la derecha restauradora y los militares catastrofistas y golpistas, y el proletariado en mal de revolución! La única novedad es aquí la entrada del Partido comunista en el Frente de las izquierdas que va a ser llamado Frente popular y la captura por ello de la organización juvenil del P.S.O.E., un refuerzo para las fuerzas políticas del orden que no fue inmediatamente entendido por todos.

Hubo la determinación de la oligarquía de destruir el régimen parlamentario, las instituciones democráticas y el movimiento obrero mismo, por la vía de la legalidad si hubiera sido posible —como durante el bienio negro, por la vía del pronunciamiento, de un golpe militar, si necesario, lo que ocurría después del triunfo electoral del Frente popular. De este punto de vista no creo hoy que el movimiento resulte de un movimiento puramente militar. El derrocamiento de la República fue preparado no solo en los cuarteles sino en las casas y oficios de la oligarquía y sabemos que los Calvo Sotelo y Gil Robles ayudaron no sólo políticamente sino materialmente a la preparación del pronunciamiento.

Hubo finalmente la tercera vía, la del cambio revolucionario, sin otra cabeza que las llameantes palabras de Largo Caballero y sus lugartenientes, reforzada por el desarrollo del mito de la unidad triunfante después de la epopeya de la U.H.P. en Asturias: esa vía era claramente la de la entrega al pueblo de todas las riquezas económicas, la incautación o la socialización, en todo caso la colectivización.

En esa nueva situación abierta por el fracaso de la insurrección proyectada en Octubre de 1933, los reformistas afirman que temen ante todo que el verbalismo revolucionario de la izquierda del P.S.O.E. viene a abrir la puerta al fascismo, y las derechas pretenden que los reformistas mismos, por su ideología y su impotencia, tienen que abrir la puerta al caos y a la anarquía, en otras palabras, a la revolución. Nadie defiende un programa de palabras transicionales para ir a la revolución. Solos los anarquistas defienden abiertamente su programa de comunismo libertario en forma utópica y casi abstracta. Pero la idea de una revolución “radical”, “como los Rusos”, camina y se puede decir que está presente en todas las iniciativas no solo de los conspiradores de derecha, enemigos de los obreros y campesinos, y de ella, sino, incluso, en la de éstos últimos.

Los meses de 1936 después del triunfo electoral de las izquierdas son los de los últimos cambios. Las fuerzas “accidentalistas”, después del fracaso electoral de la derecha se reunían con los “catastrofistas” y adoptaban su método y programa de acción, y preparaban con ellos el pronunciamiento militar o, mejor dicho, el pronunciamiento de una parte del Ejército con el apoyo de la mayoría de las derechas. Los dos grandes partidos obreros, el P.S.O.E. y al Partido Comunista, fuerte por sus lazos internacionales, forman con Azaña y Martínez Barrio el Frente popular con un programa reformista moderado y naturalmente de defensa de la República pero, en la práctica, después del día mismo del triunfo electoral no es la menor paradoja que, al lado y hasta bajo la bandera del Frente Popular, es el triunfo de la radicalización en las reivindicaciones populares, las iniciativas, las realizaciones de las masas populares.

El programa electoral de la coalición de izquierdas prometía la amnistía de los presos políticos, los famosos 30.000 del Octubre de 1934 y particularmente en Asturias. Antes de la votación de la ley y hasta antes de la reunión misma de las Cortes, el día mismo del triunfo electoral del Frente popular, por la tarde, desfiles de victoria, manifestaciones de masas, en Oviedo y Valencia entre otras, impusieron la apertura de las prisiones y la liberación de los presos de 1934. El programa preveía no solo la amnistía, sino también la readmisión en sus respectivos puestos de trabajo de los obreros despedidos después de los acontecimientos. Esta medida de reparación y justicia es traducida por los trabajadores como una reivindicación de verdadera justicia, no solamente de la readmisión inmediata, sino del pago de los salarios “atrasados” a los trabajadores que habían sido despedidos o encarcelados. El programa rechazaba la nacionalización de la tierra, pero preveía una serie de medidas para realizar lo que llamaba “la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño”, en otras palabras el reanudamiento de la reforma agraria. Después del triunfo electoral de las izquierdas, con la reconstitución de la F.N.T.T., destruida en 1934, como organización campesina de masa, hubo de nuevo invasiones de propiedades rurales. El historiador americano Edward Malefakis escribe:

*“El 24 de marzo (...) la F.N.T.T. ordenó a la Federación de Badajoz que lanzase un asalto masivo a las fincas en toda la provincia. A las cinco de la madrugada del 25 de marzo, unos 60.000 campesinos quizá la mitad del campesinado masculino de Badajoz se pusieron en marcha para ocupar unas 300 fincas previamente seleccionadas al grito de “¡Viva la República!”. Una vez señalados los límites de las tierras que iban a cultivar, empezaron a labrarlas. La precisión y el perfecto orden con el que actuó esta gigantesca masa de gente fue impresionante”.*

Una palabra más sobre la economía para demostrar que no olvidamos el título de la conferencia. Se contaban en marzo unos 840.000 parados, es decir el 17% de la población activa, no sólo con el desempleo en la industria, sino con un verdadero lock out organizado como forma de resistencia por los latifundistas. Es claro luego que las sociedades y empresas capitalistas —incluso la Compañía de Río Tinto— no tienen posibilidad financiera, es decir económica —dentro del marco existente— no sólo de emplear, sino de pagar con atraso los millares de trabajadores despedidos y que la reivindicación de la “justicia” era incompatible con el provecho de los empresarios. No tenía tampoco posibilidad de conceder los aumentos de pagas y satisfacer las reivindicaciones salariales y horarias con sus consecuencias salariales. Claro además que la explotación de las fincas ocupadas no tenía ninguna posibilidad práctica de cualquier duración sin crédito y sin una ayuda financiera que no se podía esperar de los bancarios. En una palabra, las aspiraciones y reivindicaciones de los trabajadores, obreros y campesinos, exigían la destrucción —si no formalmente, al menos implícitamente— exigen la destrucción del marco de las relaciones de propiedad existentes, es decir del capitalismo, un límite que los trabajadores en su movimiento de reconquista empiezan a atravesar. El ejemplo más conocido es el de los tranviarios de



Madrid. La compañía dijo que no podía pagar y satisfacer las reivindicaciones y ofrecía abrir sus libros de contabilidad. La respuesta de los ferroviarios fue funcionar por su propia cuenta: abrieron una suscripción que les proporcionó sumas considerables y funcionaron por su propia cuenta con los tranvías...

La dialéctica de la historia se manifiesta pues una vez más en la conclusión de este período de la historia y con el comienzo de la guerra civil. El levantamiento militar de la noche del 17 al 18 de Julio, en Navarra del 18 al 19 tenía como objetivo el derrocamiento del gobierno Casares y, con él, del régimen republicano. Pero su verdadero objetivo era aplastar el movimiento obrero y campesino, “regenerar” a España, exorcizar definitivamente el espectro de la revolución. De hecho, el golpe contrarrevolucionario va precisamente a liberar a los obreros y campesinos de las vacilaciones y de las divisiones de sus partidos y sindicatos y a desencadenar esta revolución que precisamente buscaba prevenir. Algunos días después se enfrentan dos Españas, la “nacionalista” y la “republicana”, de hecho, la de la revolución y la de la contrarrevolución. La última paradoja es la presencia a la cabeza de la segunda de un gobierno de republicanos burgueses bajo la bandera del Frente popular, los hombres de la reforma encabezando la España de los comités y de la colectivización.

Todo esto indica —y estas observaciones serán mis conclusiones— que no hay un lazo automático entre las contradicciones económicas y los enfrentamientos políticos— y también que la historia de la guerra civil misma no es una historia meramente española con raíces exclusivas en la economía y la sociedad, sino también y quizá sobre todo una parte de la historia mundial y uno de sus eslabones más débiles, y que hay que buscar sus elementos, por ejemplo, tanto en la historia de la revolución rusa o de la contrarrevolución alemana e italiana como en la preparación de la segunda Guerra mundial.